

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

21090 *LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.*

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de petición se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución española. Dicho precepto remite a la ley la regulación del modo en que el mismo ha de ejercerse y los efectos que produce su ejercicio.

Hasta ahora ha sido en una norma preconstitucional, la Ley de 22 de diciembre de 1960, donde se encontraba su régimen jurídico, aunque convenientemente adaptado por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Parece llegado el momento de proceder a la actualización del desarrollo normativo del derecho fundamental de petición desde una perspectiva constitucional.

Probablemente su carácter residual respecto a otros instrumentos de relación entre los ciudadanos y los poderes públicos, unido a que la Ley de 1960 contiene una regulación eminentemente técnica de carácter administrativo y, por ende, neutral, han sido razones suficientes para mantener una norma preconstitucional en materia de derechos fundamentales.

Ahora bien, no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Al abordar de nueva planta el desarrollo legal de un precepto constitucional en el que se reconoce un derecho fundamental es ineludible atender a la construcción doctrinal que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. En consecuencia, la presente Ley se ajusta a los pronunciamientos del Alto Tribunal contenidos en diversas sentencias y autos, con especial atención a la sentencia de 14 de julio de 1993.

La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho de petición se realiza extensivamente, enten-

diendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, como cauce de expresión en defensa de los intereses legítimos y como participación ciudadana en las tareas públicas, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan sólo se establece la limitación que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitución, y determina que aquéllos solo pueden ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Como es tradicional en nuestros precedentes legales, así como en el Derecho comparado, se introduce la previsión de que del ejercicio del derecho no puede derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo cuando incurra, con ocasión de su ejercicio, en delito o falta.

Los destinatarios de la petición pueden ser cualesquiera poderes públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales, así como todas las Administraciones públicas existentes. El ámbito de competencia de cada uno de los posibles destinatarios determinará su capacidad para atender las peticiones que se les dirijan.

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Ahora bien, su carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado.

La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio —con especial atención al impulso de los de carácter electrónico—, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mínimos imprescindibles para su ejercicio; además en la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde están estatutariamente reconocidas, así como por la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.

Sin entrar en el detalle de su tramitación, orientada necesariamente a la satisfacción del derecho, la Ley presta singular atención a las obligaciones de los poderes públicos y autoridades destinatarias de las peticiones. En los términos establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional se regula la obligación de los destinatarios públicos de las peticiones de acusar recibo de las reci-

bidat y, salvo excepciones tipificadas restrictivamente, la obligaci3n de tramitarlas y contestarlas adecuadamente, lo que constituye desarrollo del contenido esencial de este derecho.

En todo caso, existe una vocaci3n definida hacia la efectiva satisfacci3n del derecho que se manifiesta tanto en la regulaci3n de los problemas de competencia de la instituci3n o autoridad que deben resolverla, como en el r3gimen de protecci3n jurisdiccional del derecho que, como no puede ser de otra forma, trat3ndose de un derecho fundamental, goza del tratamiento que se deriva del art3culo 53.2 de la Constituci3n.

Por 3ltimo y en reconocimiento obligado a la autonom3a organizativa y regulatoria se remite a su r3gimen especial al ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut3nomas. Por otras razones, tambi3n se respeta el espec3fico r3gimen de las quejas al Defensor del Pueblo e instituciones an3logas de las Comunidades Aut3nomas.

Art3culo 1. *Titulares del derecho de petici3n.*

1. Toda persona natural o jur3dica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petici3n, individual o colectivamente, en los t3rminos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultar3n exentos de responsabilidad quienes con ocasi3n del ejercicio del derecho de petici3n incurriesen en delito o falta.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, s3lo podr3n ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislaci3n espec3fica.

Art3culo 2. *Destinatarios.*

El derecho de petici3n podr3 ejercerse ante cualquier instituci3n p3blica, administraci3n, o autoridad, as3 como ante los 3rganos de direcci3n y administraci3n de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones p3blicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el 3mbito territorial o funcional de 3sta.

Art3culo 3. *Objeto de las peticiones.*

Las peticiones podr3n versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el 3mbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de inter3s colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacci3n el ordenamiento jur3dico establezca un procedimiento espec3fico distinto al regulado en la presente Ley.

Art3culo 4. *Formalizaci3n.*

1. Las peticiones se formular3n por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de car3cter electr3nico, que permita acreditar su autenticidad, e incluir3n necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la pr3ctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petici3n.

2. En el caso de peticiones colectivas, adem3s de cumplir los requisitos anteriores, ser3n firmadas por

todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.

3. El peticionario podr3 dar cuenta del ejercicio de su derecho a instituci3n u 3rgano diferente de aqu3l ante quien dirigi3 la petici3n, remiti3ndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.

4. Los peticionarios podr3n exigir la confidencialidad de sus datos.

Art3culo 5. *Utilizaci3n de lenguas cooficiales.*

1. En el 3mbito territorial de las Comunidades Aut3nomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad ling3ística, los peticionarios tendr3n derecho a formular sus peticiones a la Administraci3n General del Estado o a los organismos p3blicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elecci3n.

2. En aquellas peticiones que se dirijan a las instituciones auton3micas y entidades locales, el uso de la lengua se ajustar3 a lo previsto en la legislaci3n auton3mica correspondiente.

3. La instituci3n, administraci3n u 3rgano instructor deber3 traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Aut3noma y los documentos dirigidos a los interesados que as3 lo soliciten expresamente. Si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Aut3noma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no ser3 precisa su traducci3n.

Art3culo 6. *Presentaci3n de escritos.*

1. El escrito en que se deduzca la petici3n, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podr3n presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislaci3n reguladora del R3gimen Jur3dico de las Administraciones P3blicas y del Procedimiento Administrativo Com3n.

2. La administraci3n, instituci3n p3blica o autoridad que reciba una petici3n acusar3 recibo de la misma y lo comunicar3 al interesado dentro de los diez d3as siguientes a su recepci3n. Esta actuaci3n se llevar3 a efecto por el 3rgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.

Art3culo 7. *Tramitaci3n de peticiones. Subsanaci3n.*

1. Recibido el escrito de petici3n, la autoridad u 3rgano al que se dirija proceder3 a comprobar su adecuaci3n a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciaci3n deber3 declararse su inadmisión o tramitarse la petici3n correspondiente.

2. Si el escrito de petici3n no reuniera los requisitos establecidos en el art3culo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerir3 al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de quince d3as con el apercibimiento de que, si as3 no lo hiciera, se le tendr3 por desistido de su petici3n, notific3ndose entonces su archivo con expresi3n de la causa.

3. Asimismo se podr3 requerir al peticionario la aportaci3n de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtenci3n est3 a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles.

dibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.

Artículo 8. *Inadmisión de peticiones.*

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.

Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.

Artículo 9. *Declaración de inadmisibilidad. Plazo.*

1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

Artículo 10. *Decisiones sobre competencia.*

1. Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6.2.

2. Cuando un órgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo.

Artículo 11. *Tramitación y contestación de peticiones admitidas.*

1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como

resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.

Artículo 12. *Protección jurisdiccional.*

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.
- b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
- c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Disposición adicional primera. *Regímenes especiales.*

1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus firmantes podrá convertirse en petición ante las Cámaras, en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.

Disposición adicional segunda. *Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas.*

Queda excluida de la aplicación de esta Ley el régimen de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonómicas de naturaleza análoga, que se regirán por su legislación específica.

Disposición adicional tercera. *Peticiones de los internos en las instituciones penitenciarias.*

Las peticiones formuladas por los internos en el ámbito regulado por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se ajustarán a lo dispuesto en la misma.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Queda derogada la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del derecho de petición.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las demás normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley Orgánica.

Disposición final única. *Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.*

1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones de desarrollo y aplicación de la presente Ley Orgánica que resulten necesarias.

2. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

21091 *CONFLICTO positivo de competencia número 2637-2001, interpuesto por el Gobierno de la Nación, contra el Decreto del Gobierno Vasco 309/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el II Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.*

El Tribunal Constitucional por Auto de 30 de octubre actual, ha acordado el levantamiento de la suspensión de la vigencia del Título II, Capítulo 5, Sección segunda («De las Funciones de Coordinación») y Adenda del II Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Decreto del Gobierno Vasco 309/2000, de 26 de diciembre, cuya suspensión se produjo en el conflicto positivo de competencia número 2637-2001, que fue promovido por el Abogado del Estado en representación del Gobierno de la Nación, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 134, de 5 de junio de 2001.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN

21092 *CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 4.246/2001.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de octubre actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 4.246/2001, planteada por Juzgado de lo Penal 6 de Granada, en relación con el

artículo 335 del Código Penal vigente, por presunta vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

21093 *RECURSO de inconstitucionalidad número 5.493/2001, promovido por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón contra determinados preceptos del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5.493/2001, promovido por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón contra los artículos 67 a 72 y, por conexión, el artículo 53.6 y la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Secretario de Justicia.—Firmado y rubricado.

21094 *RECURSO de inconstitucionalidad número 1.321/1992, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 3 de la Ley de Cantabria 4/1992, de 24 de marzo.*

El Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de octubre actual, ha acordado tener por desistido al Presidente del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad número 1.321/1992, promovido en relación con el artículo 3 de la Ley del Parlamento de Cantabria 4/1992, de 24 de marzo, de Constitución de Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones Urbanísticas Prioritarias.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN

21095 *RECURSO de inconstitucionalidad número 5.343/2001, promovido por el Presidente del Gobierno, contra determinados preceptos de la Ley Foral del Parlamento de Navarra 17/2001, de 12 de julio, reguladora del Comercio en Navarra.*

El Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5.343/2001, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 23.3, párrafo tercero; 24.1; 40.2.c); 46.1; 50.2, y 72.1 y disposición final segunda de la Ley Foral del Parlamento de Navarra 17/2001, de 12 de julio, reguladora del Comercio en Navarra. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso —16 de octubre de 2001— para las partes del proceso y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN